

NOMENCLATURA : 1. [40] Sentencia
JUZGADO : 2º Juzgado Civil de Santiago
CAUSA ROL : C-34172-2019
CARATULADO : VIDAL/FISCO DE CHILE/CONSEJO DE
DEFENSA DEL ESTADO

Santiago, cinco de Enero de dos mil veintitrés.

VISTOS:

Con fecha 12 de diciembre de 2019, comparece Guillermo Hernán Lara Leal, abogado, domiciliado en Manuel Antonio Maira 1011 casa Q, comuna de Providencia, Santiago, en representación judicial de doña **MARTA AMELIA VIDAL SILVA**, labores de hogar, domiciliada en pasaje Polpaico N°3178, Población Venezuela, comuna de Recoleta, quien interpone acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Estado y **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, domiciliado en calle Agustinas 1687 piso 1º, comuna de Santiago, por los motivos de hecho y fundamentos de derecho que expone.

Sostiene haber sido víctima de tortura y atentado contra su integridad física, por parte de Carabineros de Chile, al haber recibido dos impactos de balas en su espalda y cuyas consecuencias perduran hasta la actualidad. Lo expuesto, significaría un incumplimiento por parte del Estado de Chile de su deber de proteger a sus ciudadanos y observar los convenios internacionales que resguardan la integridad física de las personas, lo que habría provocado un daño de tal entidad, que únicamente podría ser reparado, en parte, por medio de la condena al pago de indemnización de perjuicios.

Expone que a diez días del golpe de Estado, el 20 de septiembre pasadas las 21.00 horas en el pasaje Polpaico de la población Venezuela, lugar donde vivía y vive hasta hoy, cuando tenía 14 años y mientras se encontraba con otros vecinos en la calle y ella con el grupo de scout en el que participaba, habría llegado un camión con Carabineros momento en el que los vecinos se habrían escondido y advertido que Carabineros dispararía. Relata que corrió hacia su casa cuando una vecina salió a su encuentro y se dio cuenta que desde sus brazos y estómago salía mucha sangre, luego de un tiempo, habría despertado en un lugar desconocido, con las vecinas a su alrededor, y a lo lejos escuchó los gritos de su madre, cuando la vió se desmayó.

Agrega que fue trasladada en ambulancia al Hospital J.J. Aguirre, en urgencias fue despojada de su ropa, encontrándose desnuda en una camilla sin sábanas. Declara que no lograba ver nada, pues un foco daba directo a sus ojos, y que escuchaba dos voces, una femenina y otra masculina. Recuerda haber sentido dolor, frío y preocupación, pues desde donde se encontraba escuchaba como interrogaban a su madre, luego, el doctor le habría preguntado a ella dónde guardaban armas en su casa, insistentemente. El interrogatorio habría continuado ante su negativa y se le habría negado el suministro de anestesia, narra que para coser su espalda simplemente la



voltearon y lo hicieron, la mujer en la habitación se burló de su vagina y le habrían advertido que la dejarían allí hasta que decidiera hablar. Se encontraba en una habitación a oscuras, sin ropa ni sábanas, sintiendo gran dolor y frío. En ese momento, explica, alguien entró a su habitación y la cubrió con unos trapos, corrieron por unos pasillos hasta llegar a una ambulancia, salió junto a otras personas y la llevaron a su casa.

Declara que al día de hoy mantiene una cojera severa a causa del dolor que le provocaba caminar producto de sus heridas, tratándose durante años en el Hospital Traumatológico, sufre ataques de pánico durante las noches y que su sexualidad ha quedado dañada.

Producto de los hechos ocurridos aquella noche, la “Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura”, contemplada en la ley N° 20.405, en el segundo informe realizado se le incorporó en el N° 9443. Agrega que el demandado ha pretendido considerar las medidas de reparación propuesta por esta Comisión como indemnizatorias, en este sentido considera que las medidas reparatorias de la ley N° 19.992 tiene la característica de ser una reparación “austera”, como señala el Decreto Supremo N° 1040, mas no restablecer el equilibrio destruido por el hecho ilícito, otorgando un valor equivalente al daño sufrido.

Por último, expone en relación a una posible alegación de prescripción de parte de la demandada, que por medio de la ley N° 20.874 que “Otorga un aporte único, de carácter reparatorio, a las víctimas de Prisión Política y Tortura, reconocidas por el Estado de Chile”, se concedería una reparación parcial del daño a los titulares individualizados en la nómina de personas reconocidas como víctimas de prisión política y tortura y, a la vez, termina por reconocer al Estado como deudor de las víctimas, al otorgar una reparación parcial cuyo monto se descontará de una indemnización futura. Con ello el Estado habría renunciado en forma expresa a la institución civil de la prescripción como señala el artículo 2494 del Código Civil. Asimismo, a su juicio, otro acto de renuncia a la prescripción civil es la aceptación reciente del Estado de Chile de los fundamentos de la sentencia del 29 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ordenes Guerra y otros vs. Estado de Chile”, en el que el Estado se allanó a las conclusiones del informe de la Corte en el sentido que al alegar la prescripción civil faltó al derecho que tienen las víctimas a la protección judicial de garantizar un recurso efectivo ante los tribunales para obtener reparación, al efecto cita el artículo 92.

En cuanto a los fundamentos de derecho, indica que los hechos descritos significarían una violación al derecho a reunión artículo 10 N°4 de la Constitución del año 1925, asimismo a numerosos Tratados, Convenciones, Declaraciones y Actas que el Estado de Chile ha suscrito y se ha obligado a cumplir, en este sentido refiere el artículo 3 y artículo 13.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones



Unidas. Sostiene también que aun en caso de aceptar la justificación a la represión realizada por el gobierno de facto, esto es, que se estaba en guerra con parte de la población, tal actuar encontraría su límite en lo dispuesto en el artículo 3 del Convenio IV de Ginebra relativo a la protección a personas civiles en tiempos de Guerra.

Añade que, como se relata en los hechos de la demanda, la demandante era una menor de edad a la época de lo sucedido que habría sido víctima de atentados contra su vida e integridad física y también de torturas, situación repudiada ampliamente por la regulación internacional en materia de Derechos Humanos, a modo de ejemplo menciona el artículo 5 y artículo 63 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. Por último, se funda en lo dispuesto en los artículos 5 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República, en cuanto al reconocimiento y valor interno de los tratados internacionales mencionados, así como, la posibilidad de cualquier persona vulnerada en sus derechos por la acción del Estado o sus organismos de poder reclamar ante los tribunales que determina la ley.

Finaliza solicitando tener por interpuesta demanda de indemnización de perjuicios por responsabilidad civil extracontractual del Estado, representado por el Consejo de Defensa del Estado, por los daños morales y patrimoniales sufridos por la demandante, y se condene al demandado al pago de la suma de \$300.000.000 o la suma que este tribunal determine, más los intereses generados desde la mora en el pago efectivo, con expresa condena en costas.

Con fecha 20 de enero de 2020, se practicó la notificación de la demanda y su proveído.

Con fecha 6 de febrero de 2020, compareció el demandado solicitando el total rechazo de la acción incoada en su contra en atención a las excepciones, defensas y alegaciones que alega, con costas, y en subsidio, rebajar sustancialmente el monto indemnizatorio pretendido.

En primer lugar, opone la excepción de reparación integral, fundada en las reparaciones ya otorgadas a los familiares de víctimas de violaciones a los Derechos Humanos. En este sentido, sustenta la excepción en que en el marco de la llamada “Justicia Transicional”, se ha instado a la reparación de las víctimas por medio de programas estatales que incluyen beneficios educacionales, de salud, gestos simbólicos u otras medidas análogas a la simple entrega de una cantidad de dinero; dentro de estas medidas, la ley N° 19.123, legislación con un marcado interés reparatorio, junto con otras normas jurídicas conexas, han establecido los diversos mecanismos mediante los cuales se ha concretado esa reparación: a) por medio de transferencias directas en dinero; b) reparaciones mediante la asignación de derechos sobre prestaciones estatales específicas, en este sentido expone que la demandante ha recibido los beneficios pecuniarios contemplados en la ley N° 19.992 y sus modificaciones, asimismo que, en términos generales, existen prestaciones estatales en salud y educacionales por medio del programa PRAIS y beneficios en vivienda; y c) reparaciones simbólicas, a fin de otorgar



satisfacción a las víctimas que reparar el dolor y tristeza y con ello reducir el daño moral sufrido.

Sostiene que existe, en consecuencia, identidad de causa entre lo que se pide en estos autos y las reparaciones realizadas descritas anteriormente, por lo que no procede que sean compensadas nuevamente, cita al efecto jurisprudencia, e interpone excepción de reparación satisfactiva.

En segundo lugar, opone la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida, conforme a lo previsto en los artículos 2332 y 2497 del Código Civil, debiendo a su juicio rechazarse la demanda en todas sus partes por este motivo, toda vez que desde la época de los hechos-20 de septiembre de 1973- a la fecha de notificación de la demanda -20 de enero de 2020-, aun considerando una suspensión de la prescripción durante la época de dictadura, habría transcurrido en exceso el plazo de prescripción extintiva contemplado en el artículo 2332 del Código Civil.

En subsidio, alega la prescripción extintiva de cinco años contemplada para las acciones y derechos en el artículo 2515 del Código Civil. Cita al efecto diversa jurisprudencia e indica que atendido el carácter patrimonial de la acción incoada está sujeta a extinguirse por prescripción y que en los diversos instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, no se contempla la imprescriptibilidad de las acciones civiles derivadas de delitos o crímenes de lesa humanidad o que prohíba o impida la aplicación del derecho interno en la materia.

Alega en subsidio a las defensas y excepciones precedentes, que el monto pretendido a título indemnizatorio por la demandante es excesivo. En este sentido expone que la indemnización del daño puramente moral no se determina cuantificando, en los términos económicos, el valor de la pérdida o lesión experimentada, sino solo otorgando a la víctima una satisfacción, ayuda o auxilio que le permita atenuar el daño, morigerarlo o hacerlo más soportable, mediante una cantidad de dinero u otro medio, que en su monto o valor sea compatible con esa finalidad meramente satisfactiva. Asimismo, tampoco resultaría dable invocar la capacidad económica del demandante y/o del demandado como elemento para fijar la cuantía de la indemnización sino únicamente a la extensión del daño. Añade, en subsidio, que en todo caso la regulación del daño moral debe considerar los pagos ya recibidos del Estado y guardar armonía con los montos establecidos por los Tribunales, en este sentido, explica que se deben considerar todos los pagos recibidos a través de los años por la actora de parte del Estado, conforme a las leyes de reparación (N° 19.234, N° 19.992 y sus modificaciones y demás normativa pertinente), y que seguirán percibiendo a título de pensión, y también los beneficios extrapatrimoniales que estos cuerpos legales contemplan que tienen por objeto reparar el daño moral, de modo de evitar un doble pago por un mismo hecho.

Por último, sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses en los términos solicitados por la actora, pues únicamente podrían devengarse en el caso de que



la sentencia que se dicte en la cause acoja la pretensión y establezca esa obligación, y desde que se encuentre firme y ejecutoriada.

Con fecha 20 de febrero de 2020, la parte demandante evacuó el trámite de la réplica, y expuso en relación con la excepción de pago deducida por la demandada, primero que si bien en el texto de la contestación se indican sumas abultadas a título de indemnizatorio, no se indica el universo total de víctimas que reciben dichos aportes. Agrega que las medidas propuestas por la Comisión de Prisión y Tortura, y que se transformaron en ley, en ningún caso se podrían considerar como indemnizatorias, toda vez que la indemnización siempre tiene en consideración el daño sufrido por la víctima, es personalísima, mientras que las medidas derivadas de la ley Valech tienen un carácter universal, es un acto reparatorio definido como austero, indistinto, limitado y restringido, por ello es que no se ha reconocido como pago indemnizatorio por numerosos fallos de la Corte Suprema. Agrega que también en el ámbito internacional está firmemente asentada la obligación de los Estados de reparar a las víctimas de violaciones de las normas internacionales de derechos humanos, en este sentido cita la resolución 2005/35 de la ONU sobre Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, en su directriz IX punto 20 dispone que “la indemnización ha de concederse, de forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, por todos los perjuicios económicamente evaluables que sean consecuencia de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos o violaciones graves del derecho internacional humanitario”, por lo expuesto, pide se rechace la excepción en dichos fundamentos.

En relación con la aplicación de la prescripción extintiva que alega el demandado, reitera por un lado la imprescriptibilidad de la acción civil, en atención a que los tratados internacionales suscritos por nuestro país se desprende el deber de reparar el daño causado, cita al efecto el artículo 75 N° 1 del Estatuto de Roma y el artículo 63 del Pacto de San José, en relación con el artículo 5 de la Constitución y número 27 de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, por lo tanto, en armonía con ello se desprende que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles en lo penal, con mayor razón lo serían en lo civil, posición que ha tenido acogida en la Corte Suprema durante los últimos años.

Sin perjuicio de lo expuesto, agrega que en caso de pretender aplicar supletoriamente las normas de derecho privado a casos como el de autos, deberá aplicarse el artículo 2494 del Código Civil, entendiendo que el Estado de Chile habría renunciado a la prescripción de la acción por medio de la dictación de la ley N° 19.992, luego con la ley N° 20.874 y por último, expresamente, en la aceptación reciente del Estado de los fundamentos de la sentencia del 29 de noviembre de 2018 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Estado de Chile”, en el que el Estado de Chile se allanó a las conclusiones del informe de la Corte en el sentido que al alegarse la prescripción civil se falta al derecho de las víctimas a la



protección judicial de garantizar un recurso efectivo ante los tribunales para obtener reparación.

Por último, en relación con la fijación del daño moral, reitera que solicita una suma acorde en consideración a que se atentó contra la vida de una menor de edad, a la extrema violencia que representa disparar a un grupo de vecinos, incluidos menores, que se encontraban conversando en la vía pública, el largo tiempo sometida a tratamientos para rehabilitar su cojera y las consecuencias de haber sido sometida a vejaciones y torturas en el servicio de urgencia del Hospital, cuyas secuelas físicas y psíquicas perdurarían hasta el día de hoy. En este sentido, refiere que la resolución 2005/35 de la ONU sobre Principios y Directrices básicos sobre el derecho de las víctimas a interponer recursos y obtener reparaciones, en su numeral 20, refiere que las indemnizaciones deben concederse en forma apropiada y proporcional a la gravedad de la violación y a las circunstancias de cada caso, tomando en cuenta las consecuencias del acto ilícito como: a) daño físico o mental; b) la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, educación y prestaciones sociales, c) los daños materiales y pérdida de ingresos, incluido el lucro cesante; d) los perjuicios morales y e) gastos de asistencia jurídica o de expertos, medicamentos y servicios médicos y psicológicos y sociales.

Con fecha 6 de marzo de 2020, el demandado evacuó el trámite de duplica ratificando en primer lugar, la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación y agregando en relación con la excepción de pago que la presente acción jurisdiccional se enmarca en lo que se denomina justicia transicional, cuya regulación permitiría demostrar que los actores han optado por los beneficios reparatorios de la ley N° 19.123 y sus modificaciones, texto que ha comprendido el daño moral en forma expresa y ha establecido la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial centrada únicamente en lo económico. Explica que en el caso particular de la demandante habría recibido por concepto de la ley N° 19.992 una pensión, que desde el 1 de octubre de 2011 al 30 de enero de 2020 alcanza la suma total de \$16.645.604, además, por aporte único de la ley N° 20.874 la suma de \$1.000.000 y por concepto de aguinaldo durante el mismo período la suma de \$312.883, lo que da un total de \$17.958.487 a la fecha.

Agrega también en relación con la excepción de prescripción opuesta, que el asunto habría sido zanjado por la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el pleno con fecha 21 de enero de 2013, referida en el escrito de contestación, rol 10.665-2011, en la que se concluye que las acciones por responsabilidad extracontractual contra el Fisco prescriben en el plazo de 4 años desde la perpetración de los hechos, conforme con lo dispuesto en el artículo 2332 del Código Civil. Sostiene que hace más de 10 años la Excm. Corte ha señalado reiteradamente la aplicación del artículo 2332 del Código Civil en la materia, aplicación amparada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal. Asimismo, la máximo tribunal de justicia, ha establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del



derecho interno, entre ellas, las normas sobre prescripción de la acción civil, criterio uniforme en la tercera sala de dicho tribunal y sostenido primeramente en “Domic con Fisco” en mayo de 2002, que cita al efecto.

Con fecha 22 de abril de 2020, se recibió la causa a prueba, reactivándose el término probatorio por resolución de 19 de noviembre de 2021 (folio 27).

Con fecha 9 de junio de 2022, se citó a las partes para oír sentencia.

CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que, compareció en autos don Guillermo Hernán Lara Leal, abogado, en representación judicial de doña **MARTA AMELIA VIDAL SILVA**, quien interpuso acción de indemnización de perjuicios por responsabilidad extracontractual en contra del Estado y **FISCO DE CHILE**, representado legalmente por doña María Eugenia Manaud Tapia, Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, todos ya individualizados, por los daños ocasionados por agentes del Estado el día 20 de septiembre de 1973, según los hechos relatados y los fundamentos de derecho que se describen en lo expositivo de esta sentencia, y solicitó una indemnización de \$300.000.000 o la suma que este Tribunal estime conveniente en derecho, por los daños morales y patrimoniales provocados por el demandado, más los intereses que se devenguen desde la mora en el pago efectivo, con constas.

SEGUNDO: Que, contestando la demanda, el demandando interpuso en primer término la excepción de reparación satisfactiva, en segundo lugar, opuso la excepción de prescripción de la acción civil de indemnización de perjuicios deducida. En subsidio, a las defensas y excepciones precedentes, alega que el monto pretendido a título indemnizatorio por la demandante es excesivo. Por último, sostiene la improcedencia del pago de reajustes e intereses en los términos solicitados por la actora.

TERCERO: Que, en lo medular de su escrito de réplica la demandante expuso en relación con la excepción de pago las medidas propuestas por la Comisión de Prisión y Tortura, y que se transformaron en ley, en ningún caso se podrían considerar como indemnizatorias, toda vez que la indemnización siempre tiene en consideración el daño sufrido por la víctima, es personalísima, mientras que las medidas derivadas de la ley Valech tienen un carácter universal, es un acto reparatorio definido como austero, indistinto, limitado y restringido, asimismo que en el ámbito internacional está firmemente asentada la obligación de los Estados de reparar a las víctimas adquirida en diversos instrumentos internacionales sobre la materia.

En relación con la aplicación de la prescripción extintiva reiteró por una parte la imprescriptibilidad de la acción civil, y por otro lado sostuvo que en caso de pretender aplicar supletoriamente las normas de derecho privado a casos como el de autos, deberá aplicarse el artículo 2494 del Código Civil, entendiendo que el Estado de Chile habría renunciado a la prescripción de la acción por medio de la dictación de la ley N° 19.992, luego con la ley N° 20.874 y por último, expresamente, en la aceptación reciente del Estado de los fundamentos de la sentencia del 29 de noviembre de 2018 de la Corte



Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Órdenes Guerra y otros vs. Estado de Chile”, en el que el Chile se allanó a las conclusiones del informe de la Corte.

Por último, en relación con la fijación del daño moral, reitera que solicita una suma acorde en consideración a que se atentó contra la vida de una menor de edad, a la extrema violencia que representa disparar a un grupo de vecinos, incluidos menores, que se encontraban conversando en la vía pública, el largo tiempo sometida a tratamientos para rehabilitar su cojera y las consecuencias de haber sido sometida a vejaciones y torturas en el servicio de urgencia del Hospital, cuyas secuelas físicas y psíquicas perdurarían hasta el día de hoy.

CUARTO: Que, evacuando el trámite de duplica el demandado ratificó en primer lugar, la totalidad de las argumentaciones expresadas en la contestación y, en segundo lugar, agregó en relación con la excepción de pago que la presente acción jurisdiccional se enmarca en lo que se denomina justicia transicional, cuya regulación permitiría demostrar que los actores han optado por los beneficios reparatorios de la ley N° 19.123 y sus modificaciones, texto que ha comprendido el daño moral en forma expresa y ha establecido la incompatibilidad de sus beneficios con las pretensiones de una acción judicial centrada únicamente en lo económico, beneficios que son percibidos por la actora. Agrega en relación con la excepción de prescripción opuesta, que el asunto habría sido zanjado por la sentencia de unificación de jurisprudencia dictada por el pleno con fecha 21 de enero de 2013, referida en el escrito de contestación, rol 10.665-2011, y que hace más de 10 años la Excm. Corte ha señalado reiteradamente la aplicación del artículo 2332 del Código Civil en la materia, aplicación amparada en el artículo 2497 del mismo cuerpo legal. Asimismo, el máximo tribunal de justicia, ha establecido que los tratados internacionales sobre derechos humanos no impiden en modo alguno la aplicación del derecho interno, entre ellas, las normas sobre prescripción de la acción civil.

QUINTO: Que, para la prueba de sus asertos, la parte demandante acompañó a folio 1 y a folio 33, legalmente y sin objeción de la contraria, los siguientes documentos:

1.- Copia simple del documento “Listado de consulta víctimas ppt-Casos filtrados por los ids (41214)” con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.

2.- Copia simple de la página 187 del documento que se indica como listado de personas reconocidas como víctimas por la “Comisión Asesora Presidencial para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura”.

3.- Copia simple de la Ficha Clínica del Hospital José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile a nombre de Vidal Silva, Marta Amelia de fecha 21 de diciembre de 1956, ficha N° 9034925 que incluye copia de anamnesis de fecha 20 de septiembre de 1973, con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.



4.- Copia simple del testimonio escrito de doña Lucila Silva Tobar, madre de la demandante, prestado ante Comisión Asesora Presidencial para la calificación de víctimas, y copia de su cédula de identidad, con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.

5.- Copia simple del testimonio escrito de don Alejandro González Encina prestado ante la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de víctimas y copia de su cédula de identidad, con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.

6.- Copia simple del testimonio escrito de don Rigoberto Sáez Moya prestado ante la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de víctimas y copia de su cédula de identidad, con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.

7.- Copia simple del testimonio escrito de doña Dolarisa Guzmán prestado ante la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de víctimas y copia simple de su cédula de identidad, con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.

8.- Copia simple del testimonio escrito de doña Luisa Aurora Pérez Bastías prestado ante la Comisión Asesora Presidencial para la calificación de víctimas, y copia simple de su cédula de identidad, con timbre del Instituto Nacional de Derechos Humanos que indica ser copia fiel del original.

9.- Copia simple del documento “Informe psicológico de evaluación de daño”, suscrito por Juan Manuel Galvez Villarreal, psicólogo evaluador, Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos y por doña Carolina Rojas Stapel, Coordinadora (S), Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos.

10.- Copia simple del certificado emitido por el CESFAM del Departamento de Salud de la I. Municipalidad de Recoleta, suscrito por Dr. Eduardo Bartolomé Bachelet, Director CESFAM Dr. Juan Petrinovic.

11.- Evaluación psicológica de fecha 30 de octubre de 2019, documento suscrito por Fabiola Cruz Campos, psicóloga Universidad de Chile.

12.- Copia simple del Capítulo VIII “Consecuencias de la Prisión Política y la Tortura” del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

13.- Copia de la sentencia de fecha 14 de septiembre de 2015 de la Corte Suprema pronunciada en causa rol N° 1092-2015.

14.- Copia autorizada de la sentencia de fecha 26 de abril del 2017, pronunciada por la Corte Suprema en causa rol 11767-2017.

15.- Copia de la resolución N° 2005/35 de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas aprobada el 19 de Abril del 2005 “Principios y directrices básicas sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de Derechos Humanos y de violaciones graves del Derecho Internacional Humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones”.



16.- Copia de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Ordenes Guerra y Otros vs. Estado de Chile” de fecha 29 de Noviembre de 2018.

SEXTO: Que la demandante también rindió prueba testimonial que consta a folio 38 y que a continuación se reseña sucintamente:

- Fabiola Andrea Cruz Campos

Al punto de prueba N° 2 del auto de prueba de fecha 22 de abril de 2020, en relación con la existencia, naturaleza y magnitud del daño moral y patrimonial sufrido por la demandante, expuso que conforme con la evaluación que efectuó a la actora, pudo constatar que efectivamente presenta sintomatología relacionada con el daño sufrido o relacionado al hecho de violación de derechos humanos a que se refiere dicha evaluación. Agrega que básicamente refleja daño causado en sus aspectos emocionales, presentando sintomatología depresiva ansiosa y alteraciones en su desarrollo psicosocial luego del hecho traumático que significaron un repliegue de su vida social, miedo constante a sufrir nuevamente hechos similares y una sensación de vulneración importante, además del hecho en sí por el trato que sufrió por parte del personal de salud del hospital donde tuvo la primera atención, José Joaquín Aguirre. Declara también que desde el relato de la demandante y su correlato físico y emocional hay evidencia suficiente para poder decir que el hecho traumático que refiere le habría provocado un estrés post traumático crónico de larga data afectando su vida emocional y social, su autoestima, es decir tanto por la vulneración como por la consecuencia física de movilidad reducida que ella refiere como cojera. Esto le provocó un estado de ánimo depresivo y ansiedad generalizada desde la época de los hechos hasta el día de hoy, que ha mermado todo su potencial de desarrollo considerando que el hecho ocurrió durante su adolescencia, donde estaba justo en formación su identidad principalmente, por lo que el daño es más profundo e importante en esta etapa.

- Carlos Celín Fernández Neira

Al punto de prueba N° 1 del auto de prueba de fecha 22 de abril de 2020, esto es, si la demandante fue víctima de actos constitutivos de violaciones a los derechos humanos por parte de agentes del Estado, expuso conocer a la demandante hace unos 54 años, pues vive en la Población Venezuela, comuna de Recoleta. Declara que como en el año 1970 la demandante estaba afuera de la casa de un vecino conversando cuando pasó un camión de Carabineros y dispararon como a unos cuarenta metros y le tocó a ella un balazo en una de las caderas, relata que él se encontraba con su esposa y salieron a mirar y recuerda haber dicho que parece que habían matado a una niña y corrieron a la esquina a llamar a la ambulancia. Después de eso ella quedó con su pierna que no puede caminar, todavía camina mal, y le consta porque él vive como a 20 metros de su casa y la veía cuando iba al colegio con su pierna mala.



Repreguntado, declara que la demandante a la tenía entre 13 y 14 años y que había toque de queda a las 10.00 hrs. y los hechos relataron ocurrieron como a las 09.50 hrs.

SÉPTIMO: Que, el demandado acompañó a folio 36, legalmente y sin objeción de la contraria, Oficio Ord. N° 64199/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, del Jefe (S) del Departamento de Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social y su anexo.

OCTAVO: Que, con el mérito del Oficio Ord. N° 64199/2020 de fecha 14 de febrero de 2020, del Jefe (S) del Departamento de Secretaría General y Transparencia del Instituto de Previsión Social, se tiene por acreditado que la demandante fue víctima de prisión política y tortura, motivo por el cual es titular de los beneficios de reparación Leyes N° 19.992 y N° 20.874, como indica dicho documento aportado al proceso por el demandado. A mayor abundamiento, dichas circunstancias no fueron controvertidas por la parte demandada en sus escritos de discusión, centrando sus argumentos en la improcedencia de la indemnización solicitada por encontrarse reparado el daño y, en subsidio, por encontrarse prescrita la acción.

NOVENO: Que, conforme a lo establecido precedentemente, resulta clara la responsabilidad civil del Estado emanada de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, considerando en particular lo dispuesto en el inciso primero del artículo 6 de la Constitución Política de la República, en cuanto los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República, disponiendo el inciso final de la norma citada que la infracción de la misma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley; y, además, lo dispuesto en el artículo 4 de la Ley N° 18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado, que señala que *“El Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”*, responsabilidad que, en todo caso, no ha sido impugnada por el demandado, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por las leyes N° 19.123, N°19.992 y N°20.874 a las víctimas de prisión política y tortura, reconocidas por el Estado de Chile.

DÉCIMO: Que los vejámenes de los que fue víctima la demandante, han sido calificados como delitos de lesa humanidad, siendo, a su vez, expresas violaciones a los Derechos Humanos, según lo prevenido en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, denominada Pacto de San José de Costa Rica, suscrita por Chile en el año 1990, en virtud de la cual los Estados Americanos signatarios reconocen, entre otras garantías fundamentales:

.- que toda persona tiene derecho a que se respete su vida, sin que nadie pueda ser privado de ella arbitrariamente (artículo 4);



.- que toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, sin que nadie deba ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes (artículo 5);

.- que toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad personales, sin poder ser privado de aquella, salvo por las causas y en las condiciones fijadas de antemano por las Constituciones Políticas de los Estados Partes o por las leyes dictadas conforme a ellas, ni tampoco ser objeto de detención o encarcelamiento arbitrarios (artículo 7);

.- que la familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y debe ser protegida por la sociedad y el Estado (artículo 17);

.- que existe una correlación entre deberes y derechos, por lo que toda persona tiene deberes para con la familia, la comunidad y la humanidad, estando limitados los derechos de cada persona por los derechos de los demás, por la seguridad de todos y por las justas exigencias del bien común, en una sociedad democrática (artículo 32);

.- que se le reconoce competencia a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos por la Convención, disponga, si ello fuere procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada (artículo 63);

.- que la parte del fallo que disponga una indemnización compensatoria se podrá ejecutar en el respectivo país por el procedimiento interno vigente para la ejecución de sentencias contra el Estado (artículo 68 N° 2).

Asimismo, conviene consignar que de acuerdo al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la Organización de Naciones Unidas, vigente en Chile desde el año 1989, los Estados acuerdan que no podrá admitirse restricción o menoscabo de ninguno de los Derechos Humanos Fundamentales reconocidos o vigentes en virtud de leyes, convenciones, reglamentos o costumbres, so pretexto que el Pacto no les reconoce o los reconoce en menor grado (artículo 5 N° 2); teniendo toda persona que haya sido ilegalmente detenida o presa, el derecho efectivo a obtener reparación (artículo 9 N° 5).

DÉCIMO PRIMERO: Que en el marco del reconocimiento de la violación de Derechos Humanos en nuestro país por parte de agentes del Estado durante la dictadura cívico-militar, se dictó en el año 1992 la Ley N° 19.123, mediante la cual se creó la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, a la cual, entre sus diversos objetivos, se le encomendó especialmente promover la reparación del daño moral de las víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o de violencia política.

A su vez, la Ley N° 19.992 estableció una pensión anual de reparación en beneficio de las víctimas directamente afectadas por violaciones a los Derechos Humanos individualizadas en el anexo "Listado de prisioneros políticos y torturados", de la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas, que forma parte del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura. Dicha pensión asciende a una suma



que alcanza entre \$1.353.798 y \$1.549.422, según la edad del beneficiario, y se reajusta conforme a lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto Ley N° 2.448, de 1979 o en las normas legales que reemplacen la referida disposición, o en las normas legales que reemplacen la referida disposición. Junto a la asignación aludida, la ley que se viene reseñando también otorga a sus beneficiarios, en carácter de gratuitas, las prestaciones médicas y educacionales que detalla.

De igual manera, la Ley N° 20.874 concedió un aporte único, en carácter de reparación parcial, de \$1.000.000, a los titulares individualizados en la Nómina de Personas Reconocidas como Víctimas del Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, bajo las condiciones que señala, y que será imputable al monto que, en su caso, se otorgue por concepto de reparación pecuniaria a cada víctima de prisión política y tortura.

DÉCIMO SEGUNDO: Que las leyes precedentemente señaladas, denominadas “*leyes de reparación*”, si bien son un reconocimiento del Estado de Chile de su deber de reparar el daño causado a víctimas de violaciones a los Derechos Humanos o a sus familiares directos, en modo alguno obstan el legítimo derecho de todo ciudadano afectado por el actuar doloso de agentes del Estado involucrados en una política sistemática de violación a tales derechos fundamentales, cual es lo acontecido en la especie, de obtener una indemnización distinta de una reparación meramente de carácter asistencial, que es lo que establecen las leyes referidas, conforme al análisis de sus supuestos, renuncias permitidas y equiparidad de beneficios que involucran. Todo lo anterior, sin desconocer que tales beneficios constituyen un esfuerzo del Estado por reparar el daño moral experimentado, objetivo resarcitorio coincidente con la presente vía jurisdiccional, pero no incompatible con la misma.

En este sentido, el propio artículo 4° de la ley N° 19.123 dispone que “en caso alguno la Corporación podrá asumir funciones jurisdiccionales propias de los Tribunales de Justicia ni interferir en procesos pendientes ante ellos. No podrá, en consecuencia, pronunciarse sobre la responsabilidad que, con arreglo a las leyes, pudiere caber a personas individuales”, lo que deja de manifiesto el pleno resguardo a la garantía constitucional de acudir a los tribunales de justicia cuando se estime que existe un daño que no ha sido reparado íntegramente. En consecuencia, los medios voluntarios asumidos por el Estado y fijados en las leyes citadas, en modo alguno importan una renuncia o prohibición para que las víctimas acudan a la sede jurisdiccional a fin de que ésta, por los medios que autoriza la ley, declare la procedencia de una reparación por daño moral. (v.gr. *CS en roles 1092-2015; 17730-2015; 12636-2018; 16908-2018; 22101-2019*).

De acuerdo a lo razonado, procederá el rechazo de la excepción de reparación integral opuesta por el demandado.

DÉCIMO TERCERO: Que en segundo lugar, el demandado opuso la excepción de prescripción extintiva, fundada en que la acción indemnizatoria incoada en



autos no fue interpuesta y notificada, una vez recuperada la democracia, en el plazo de cuatro o cinco años que disponen, respectivamente, los artículos 2332 y 2497 del Código Civil.

Sobre lo anterior, cabe tener presente lo dispuesto en el artículo 5 de la Constitución Política de la República, que prescribe que el ejercicio de la soberanía reconoce como limitación el respeto a los derechos esenciales que emanan de la naturaleza humana, siendo deber de los órganos del Estado respetar y promover tales derechos, garantizados por esta Constitución, así como por los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes.

La disposición constitucional citada precedentemente permite la incorporación al derecho nacional de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales que recogen principios generales del derecho humanitario, entre las cuales se cuenta la obligación de indemnizar íntegramente los daños cometidos por violaciones de los Derechos Humanos, la que adquiere rango constitucional. Luego, la prescripción extintiva de la acción deducida no puede, por tanto, decidirse sobre la base de las disposiciones del Código Civil, las que son aplicables a delitos civiles comunes, representando un estatuto jurídico insuficiente para la entidad del hecho ilícito en cuestión, cual es, la comisión de crímenes de lesa humanidad y la consecuente necesidad de reparación, quedando la acción indemnizatoria en tal caso bajo las normas que emanan del Derecho Internacional de los Derechos Humanos y del *ius cogens* o reglas imperativas de derecho internacional.

DÉCIMO CUARTO: Que, en consecuencia, no existe norma internacional como tal e incorporada a nuestro ordenamiento jurídico, que establezca la imprescriptibilidad genérica de acciones orientadas a obtener el reconocimiento de la responsabilidad del Estado por delitos de lesa humanidad. Sin perjuicio de ello, de los variados tratados internacionales suscritos por Chile, es posible concluir que cuando se trata de la vulneración por motivos políticos de los derechos fundamentales, anteriores y superiores éstos al Estado mismo y a la Constitución, nuestro derecho interno, a la luz de los tratados internacionales en esta materia, debe darles seguridad y eficaz protección, reconociendo, declarando y potenciando el ejercicio de los derechos, debiendo el Estado cumplir no sólo con su obligación de investigar y sancionar los delitos contra los Derechos Humanos, sino que también repararlos en su integridad.

En los términos que se viene razonando, la acción resarcitoria derivada de los delitos de lesa humanidad es tan imprescriptible como lo es la investigación y sanción de dichos delitos, de modo que siendo uno de estos ilícitos el hecho generador del daño que se invoca, no resultan atingentes las normas del derecho interno previstas en el Código Civil sobre prescripción de las acciones civiles resarcitorias comunes, ya que existe un estatuto normativo internacional que ha sido reconocido por nuestro país al efecto. Así las cosas, la excepción de prescripción extintiva opuesta por el demandado también habrá de ser desestimada.



DÉCIMO QUINTO: Que en cuanto a la procedencia de la indemnización de perjuicios por daño moral, entendido este como un detrimento que se causa por la vulneración a los sentimientos íntimos de una persona, como también el que surge producto del dolor físico o psíquico infligido antijurídicamente a un individuo, habrá de decirse que en la especie, conforme con el mérito del “Informe psicológico de evaluación de daño”, suscrito por Juan Manuel Galvez Villarreal, psicólogo evaluador, Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos y por doña Carolina Rojas Stapel, Coordinadora (S), Programa de Reparación Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), concordante a su vez con la evaluación psicológica de fecha 30 de octubre de 2019, documento suscrito por Fabiola Cruz Campos, psicóloga Universidad de Chile, quien además declaró en autos al punto de prueba relativo al daño sufrido por la demandante, permiten establecer que la demandante fue herida de bala por agentes del Estado en el barrio donde vivía a la edad de 14 años, apareciendo además de la ficha clínica acompañada, que efectivamente tuvo un ingreso al Hospital José Joaquín Aguirre y que, por los hechos acaecidos ese día 20 de septiembre de 1973, sufrió un grave impacto en su desarrollo y vida posterior.

En este sentido, el primero de los informes descritos concluye que doña Marta Vidal Silva *“sufre de un cambio perdurable de la personalidad después de una experiencia catastrófica, que ha comprometido a lo largo de su vida ámbitos físicos, psicológicos y sociales producto de la vulneración de sus Derechos Humanos por agentes de las Fuerzas Armadas y de Orden”*, en el mismo tenor, el segundo informe da cuenta que la demandante *“(…) ha presentado a lo largo de los años, sintomatología principalmente ansiosa de forma crónica y severa, producto del hecho traumático sufrido consistente en el impacto de bala por Carabineros y tratos vejatorios y amenazas sufridos por parte del personal de salud del hospital donde fue atendida por este mismo hecho (…)”* agrega que la actora tiene un Trastorno de ansiedad generalizada crónico (según DSM-V), a causa de un evento traumático de haber sido impactada por una bala y actualmente un Trastorno depresivo persistente o distimia (según DSM-V) y como se agrega en la declaración de la testigo psicóloga Fabiola Cruz, concordante con los antecedentes descritos, resultó de particular trascendencia la corta edad de la víctima en las posteriores secuelas sufridas.

DÉCIMO SEXTO: Que el hito generador de los perjuicios cuya indemnización se persigue es inherente a todo cuanto fluye de los hechos dados por acreditados y no discutidos por el demandando, siendo el daño alegado igualmente inseparable de la naturaleza de los hechos, en cuanto resulta evidente que éste se produjo al verse la actora víctima de lesiones por balas de parte de Carabineros y luego víctima de vejaciones en el lugar de asistencia médica. De esta manera, los hechos en que incurrieron agentes del Estado de Chile produjeron evidentetemente el daño moral que se reclama padecido por la demandante, encontrándose aquel, en definitiva, obligado a indemnizarla.



En relación con lo anterior, el artículo 2329 del Código Civil contiene una regla general que es aplicable a toda responsabilidad causada por un hecho ilícito, incluso a la que se persigue en autos, tal es que todo daño debe ser reparado y en toda su extensión (*principio de reparación integral del daño*). Tratándose de daños extrapatrimoniales, tal principio deberá ser leído a la luz de la especial naturaleza de éstos, y que, en consecuencia, determinan que la indemnización ha de tener un carácter compensatorio.

DÉCIMO SÉPTIMO: Que, entrando al análisis y determinación del quantum indemnizatorio por concepto de daño moral, se tendrán en consideración dos elementos, por un lado, la magnitud del impacto sufrido por la actora producto de los hechos narrados - teniendo especial consideración su edad a la época de los hechos - y, por otro lado, los pagos realizados por el demandado a fin de reparar el daño causado.

Sobre lo primero, se estará al análisis efectuado en el considerando décimo quinto del presente fallo. Sobre lo segundo, cabe tener presente que el demandado acompañó oficio remitido por el Instituto de Previsión Social, que da cuenta que la demandante ha sido beneficiaria, en el período que va desde octubre de 2011 a febrero de 2020, de una suma total de \$17.958.487, recibiendo a la época una pensión mensual de \$189.552. En razón de lo expuesto, habida consideración del carácter satisfactivo de la indemnización y que esta no puede en modo alguno constituir una fuente de enriquecimiento, es que se evaluará prudencialmente la compensación del daño moral en la suma de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos).

DÉCIMO OCTAVO: Que, la demandante reclama una suma única que contempla el daño extrapatrimonial y patrimonial sufrido, sin perjuicio, respecto de éste último no se ha rendido prueba respecto de la existencia del daño, motivo por el que se rechazará en este sentido la demanda de autos.

DÉCIMO NOVENO: Que, en lo que concierne a los intereses reclamados, es preciso señalar que si bien es efectivo que la cuantía de la obligación indemnizatoria se fija prudencialmente en la sentencia definitiva cuando su objeto es resarcir el daño extrapatrimonial, lo cierto es que en el caso de autos y en virtud de lo razonado en los considerandos precedentes, la decisión contenida en la sentencia se propone dirimir el conflicto en forma definitiva e impone una condena pura y simple consistente en el pago de la suma de dinero regulada con fines reparatorios, sin perjuicio de que existan recursos posibles en su contra.

En los términos antes explicados, la obligación adquiere un objeto determinado por el fallo de la instancia y, por tanto, se hace susceptible de un cumplimiento espontáneo por el deudor a contar del instante en que la sentencia surte sus efectos, es decir, desde su notificación legal. En este sentido, la meramente hipotética disconformidad de la parte vencida con el fallo y el ejercicio eventual de medios recursivos en su contra, no enerva la aptitud del fallo para disponer actualmente la condena del deudor, fijando con certeza inmediata el monto de la indemnización (aunque, en su caso, supeditado a la “confirmación” del tribunal superior) y, por tanto,



es a contar de ese momento, que debe considerarse la mora para los efectos de que el capital adeudado devengue los respectivos intereses legales.

Por lo demás, una interpretación en contrario conduce al absurdo de que, en el tiempo intermedio entre la notificación de la sentencia definitiva y su adquisición de un carácter firme, el capital asentado en el fallo permanecerá invariable, sin reajustes ni intereses, vulnerándose el indiscutido principio del valorismo en las obligaciones dinerarias, y el de la reparación integral del daño, toda vez que los perjuicios ocasionados, además, con el retardo en el pago de una suma de dinero (que es lo que previene el artículo 1559 del Código Civil) quedarían sin resarcir.

Por estos motivos, se accederá a la condena al pago de intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

VIGÉSIMO: Que no siendo completamente vencido el demandado, no se accederá a la condena en costas de este.

POR ESTAS CONSIDERACIONES y visto, además, lo dispuesto en los artículos 5, 6, 7 y 38 inciso segundo de la Constitución Política de la República; 4, 5, 7, 17, 32, 63 y 68 N° 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 5 N° 2 y 9 N° 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de las Naciones Unidas; 4 de la Ley Orgánica Constitucional N° 18.575; 1 y 2 de la Ley N° 19.123; 1 y 2 de la Ley N° 19.992; 1 de la Ley N° 20.874; 1437, 1698 y siguientes, 2284, 2314, 2332, 2514 y 2515 del Código Civil; y 144, 160, 170, 254, 341, 342 N° 3, 356, 384 N° 1, 748 y 751 del Código de Procedimiento Civil; **se declara:**

I.- Que **se rechaza las excepciones** de reparación integral, así como también la de prescripción extintiva opuestas por el demandado en su escrito de contestación.

II.- Que se acoge la demanda de indemnización de perjuicios deducida en autos, solo en cuanto se condena al demandado **FISCO DE CHILE** al pago de \$30.000.000.- (treinta millones de pesos) en favor de la demandante, **MARTA AMELIA VIDAL SILVA**, por concepto de daño moral, suma que deberá ser pagada con intereses corrientes para operaciones en moneda nacional no reajustables a contar de la época de la notificación de esta sentencia y hasta su pago efectivo o solución.

III.- Que cada parte pagará sus costas.

REGÍSTRESE, NOTIFÍQUESE Y CONSÚLTESE, SI NO SE APELARE.

ROL C-34172-2019.

Dictada por Manuel Figueroa Salas, Juez Titular del Segundo Juzgado Civil de Santiago.

Se deja constancia que se dio cumplimiento a lo dispuesto en el inciso final del art. 162 del C.P.C. en **Santiago, cinco de Enero de dos mil veintitrés**



